

Los malos de la película

9

Aquella mañana los perros empezaron a ladrar furiosamente, despertando a Leonardo Cortés Novoa. El joven juez abrió los ojos, aunque no se movió de la cama para no despertar a su mujer Rosario. Empezó a darle vueltas a la mente. Algunos días antes se habían marchado con sus familias el alcalde, el tesorero y el secretario municipal. “Habrán ido de vacaciones”, se decía en el bar. ¿Todos juntos? Nunca había sucedido hasta entonces que él, Leonardo, se convirtiera en la única autoridad civil de Mapiripán. Hasta ese día se había ocupado en la pequeña ciudad junto al río Guaviare, como máximo, de alguna muerte entre borrachos, agresiones por problemas de cuernos y algunos robos de ganado.

Los militares se habían marchado hacía tiempo. Los soldados del batallón Joaquín París, estacionados en San José del Guaviare, a veinte minutos en helicóptero y un par de horas por el río, volvían cada tanto, nerviosos y cautos como una tropa de ocupación. Los policías habían abandonado el poblado en el mes de septiembre anterior, cuando su edificio había sido asaltado y destruido por las FARC. Aquella acción, en la que había muerto un joven agente, había estado conducida por Alexander, un guerrillero procedente de Mapiripán, que ocupaba el cuarto lugar en la jerarquía del XLIV Frente, después del comandante John 40 y los capitanes Ben Hur y Hernando. Se murmuraba desde algunos días que el propio Alexander había desertado, pasando a las filas de los paramilitares con cuatro guerrilleras más, tras haber extorsionado por 40 millones de pesos a los comerciantes de la zona.

Leonardo recordó que el día anterior se había ido también la familia de Alexander. ¿Otras vacaciones? En medio de los ladridos, el juez empezó de pronto a distinguir el ruido inconfundible de órdenes militares, gritos, insultos. Y comenzó a tener miedo. Un día antes, él mismo había llamado por teléfono a la policía de Charras para tener noticias sobre los movimientos de algunas tropas estacionadas a la otra orilla del Guaviare. "Aquí solamente está el ejército", le habían tranquilizado. Cuando empezaron las patadas contra la puerta, haciéndole saltar de la cama y despertando bruscamente a la mujer y a los cuatro hijos, Leonardo quiso creer que se trataba de soldados del batallón Joaquín París. Abrió la puerta y comprendió que no era así. "¿Es usted el juez?", le preguntó un hombre, con una ametralladora AK47 a la espalda, que llevaba el brazalete rojo de las autodefensas. No bastó la respuesta afirmativa de Leonardo. Sin añadir palabra, el hombre armado penetró en la casa y, con otro soldado vestido con ropa de camuflaje, comenzó a sacar los cajones y a abrir las puertas del aparador.

Uno de los dos milicianos le dijo aparte: "¿Tienes miedo?" Lo tuteaba. Mala señal. "No, ¿por qué iba a tener? Soy el juez", repitió Leonardo, tal vez para convencerse de que no podía sucederle nada. El otro, que parecía ser el jefe, exigió que le entregara la llave de la casita que hacía las veces de juzgado. "¿Tienes otra copia?", "no", respondió instintivamente. Esa mentira podía costarle la vida, pero Leonardo pensó que no podía perder la única posibilidad que le quedaba de defender a la gente de Mapiripán. En el juzgado se hallaba uno de los pocos teléfonos del poblado, desde el que habría podido pedir auxilio a San José, a Villavicencio e, incluso, a Bogotá. Le vino a la memoria su abuelo, uno de los primeros socialistas del Meta, y su padre, subteniente del ejército, que se había encontrado siete veces ante el Consejo de Guerra por haber ayudado a los indígenas de la región de Vichada a organizarse y a luchar por sus derechos.

"Mientras permanecemos en el pueblo no se te ocurra entrar en el juzgado". "Pero yo tengo que administrar la justicia...". El hombre lo fulminó con la mirada. "Ahora la justicia la administramos nosotros. Y de forma más eficaz que tú". Leonardo no replicó. Ya era suficiente estar vivo. Por aquel día, al menos. Toda su familia estaba allí. La mujer y la hija mayor asustadas, los hijos más pequeños, todos varones, que se restregaban los ojos sin entender qué estaba sucediendo. Después decidió salir de casa para comprobar personalmente qué había sucedido. Besó a todos. Podría ser la última vez que los veía. Ya en la calle, se dio cuenta de que los paras habían invadido Mapiripán y tenían retenidos a sus tres mil habitantes. A la altura del parque Gaitán, encontró a Antonio Barrera, al que llamaban

Catumare, uno de los fundadores del pueblo, comerciante y dueño del bar y billar, y de la pensión Catumare. Estaba rodeado por un grupo de milicianos armados con pistolas y machetes. Al mando se encontraba un negro enorme que, en aquel momento, increpaba con dureza al prisionero. Leonardo y Catumare estaban unidos por una amistad instintiva y por la antigua militancia en la Unión Patriótica. Se miraron sin decir palabra.

Más adelante encontró a Vladimiro Muñoz, secretario municipal. También a él le habían pedido la llave del Concejo. Aquel martes, 15 de julio de 1997, los paramilitares secuestraron a ocho hombres. Catumare quedó encerrado en una casa. Cuando lo supo Leonardo se dirigió allí junto con uno de sus hijos. A la puerta se encontraban solamente dos milicianos tomando cerveza. Leonardo levantó el tono de la voz al hablar y, al sentirlo, Catumare empezó a gritar: “¡Señor juez, señor juez! ¿Ha venido a liberarme?” “No, Antonio”, respondió Leonardo. “¿Cree que me harán daño? ¡Señor juez, sálveme!” Leonardo no se atrevió a responderle. Se alejó con una angustia tremenda. En la taberna de enfrente se hallaba el negro de casi dos metros de altura, a quien todos llamaban King Kong. “Soy el juez. ¿Con quién puedo hablar acerca del señor Barrera?” Con un marcado acento de la costa atlántica, el hombre respondió que quien decidiría el destino de “aquella mierda” era Águila 4.

El juez recorrió todo el pueblo antes de hallar al comandante de los paras. Era un blanco del departamento de Cundinamarca. “¿Es amigo suyo?”, le preguntó bruscamente. “No, pero quisiera saber qué piensan hacerle”. “Usted no puede salvarlo de ninguna manera”. “Pero ¿de qué lo acusan?”. “Usted, señor juez, no es un huevón sino una persona instruida. Debería saber que ese hombre es un colaborador de la guerrilla”, le dijo mirándole fijamente a los ojos. Leonardo lo intentó todo. Se hizo el tonto. Trató incluso de filosofar, hablando de la inutilidad de la pena de muerte. Logró que dejaran libres a tres personas, aunque no a Catumare. Juró que en los diez meses de permanencia en Mapiripán no lo había visto nunca hablar con los guerrilleros. Águila 4 le cortó secamente, y tuvo que marcharse.

Al barquero Sinaí Blanco le ordenaron no moverse de su casa. También a él le acusaban de colaboración con los guerrilleros. Sinaí era uno de los cuatro habitantes de Mapiripán que recaudaba el impuesto de la gasolina que llegaba al pueblo, utilizada en su mayor parte para el funcionamiento de los laboratorios de cocaína esparcidos por la selva, al otro lado del río Guaviare. Una cuota de la llamada “tasa revolucionaria” se quedaba en Mapiripán, por decisión de los guerrilleros, y servía para construir y reparar las calles, mantenimiento del hospital y paga de los maes-

tros de la escuela. Los paras no lo consideraban atenuante. Las hijas de Sinaí le suplicaron que intercediera, pero el juez no podía en modo alguno volver donde Águila 4. Sugirió a las muchachas que convencieran a su padre de que esperase a que oscureciera para intentar la huida, aunque sabiendo que Sinaí no lo hubiera hecho nunca. Durante toda su vida había huido de la violencia.

Aquel 15 de julio hacía un calor sofocante. Todos imaginaban lo que podía suceder. Cada vez se acercaba más gente al juez para pedirle consejo y comunicarle que habían apresado a otros. ¿Los matarían, los harían desaparecer u organizarían un proceso en la plaza como solía hacer la guerrilla? Al ponerse el sol creció el miedo. No necesitaron ninguna orden para encerrarse todos en sus casas. Los paramilitares apagaron las plantas eléctricas antes de que anoheciera. Rosario convenció a sus hijos de que se acostaran. Leonardo permaneció en la puerta de su casa, sin hacer caso a su mujer que le pedía que entrase. Solamente lo hizo cuando sintió que venía gente. Oculto tras los visillos de la ventana vio pasar a seis o siete hombres armados, mandados por King Kong que empujaban a dos personas vendadas y con las manos atadas a la espalda. El juez reconoció la voz de Catumare. “¿Adónde nos llevan?”, preguntaba insistentemente el viejo. Leonardo temía saberlo. A unos cien metros de la casa, en el barrio El Alto, se hallaba uno de los tres mataderos del pueblo. Esperó unos segundos antes de salir por la puerta de atrás, sin hacer caso a su mujer. Trató de no hacer ruido, aprovechando que los perros no habían cesado de ladrar a lo largo de aquel día terrible.

El horror no es como uno lo imagina, sino mucho peor. Leonardo hubiera preferido no ver el espectáculo que su deber como juez le obligaba a mirar, a la luz de la luna casi llena. El primero en quien se centró King Kong fue precisamente en Catumare. Aquella bestia lo levantó con una mano y con la otra le clavó por detrás de la nunca el gancho para colgar los trozos grandes de carne. Catumare gritaba con voz ronca. Los milicianos se echaron a reír y empezaron a atormentarlo con los machetes por el pecho, espalda, vientre. King Kong le golpeaba con ferocidad, abriéndole heridas que se llenaban de sangre. Catumare gritaba. Imploraba que no lo mataran de aquella manera. Casi no se entendían sus palabras. Leonardo se secó las lágrimas que le caían sin darse cuenta. Sentía que debía seguir mirando aquel horror. Cuando tenía un brazo medio desgajado y el vientre abierto, el viejo comenzó a invocar el nombre de Agustín, tal vez un amigo o un hermano. Nadie podía ayudarle. Leonardo deseaba solamente que terminara aquel tormento cuanto antes. Transcurrieron casi diez minutos hasta que King Kong decidió abrirle la garganta, haciéndole sacar el último y atroz estertor. Leonardo se sentía paralizado.

Antes de meterse con el otro prisionero, que se mantenía en silencio, acaso llorando, los milicianos tomaron otra cerveza. Estaban excitados. Leonardo abandonó su escondrijo detrás de un árbol. No era capaz de asistir a otra ejecución. Temblaba. Llegó a casa y vio a Rosario llorando. Los hijos estaban despiertos, excepto el pequeño. Casi a la vez, le preguntaron todos sobre aquellos gritos. “Son los vecinos que están discutiendo”. Pero los gritos comenzaron de nuevo. Seguramente habían clavado el gancho al otro prisionero. El juez miró el reloj. El suplicio duró mucho más que antes. Casi veinte minutos. Tal vez la víctima era más joven que Catumare. O tal vez se habían entretenido en interrogarlo.

Aquella noche Leonardo se mantuvo en vela hasta que el grupo de asesinos pasó de nuevo por delante de su casa. Se despertó con la idea fija de acabar con aquel horror. Las calles del poblado se hallaban desiertas. Pocos habían conseguido dormir aquella noche. Llegó hasta el madero. Había más moscas que otras veces, o tal vez era solamente una impresión. Cuando salió el sol la gente se le acercó pidiéndole que hiciera algo. Alguien criticó al alcalde que había escapado, y al cura, don Marco Vinicio Pérez, que se había escondido en la iglesia. Habían ido en su busca para que bendijera los restos de los cadáveres hallados junto al embarcadero, sin que ninguno se atreviera a acercarse ante las amenazas de represalia de los asesinos. A mediodía se corrió la voz de que los paras estaban a punto de irse. Tras haberse reunido, salieron, efectivamente, hacia el norte. Algunos se ilusionaron imaginando que había concluido la pesadilla. Leonardo aprovechó para llegar hasta su oficina, y se puso a redactar con su vieja máquina de escribir un informe, que luego enviaría por fax a su superior del Tribunal de Villavicencio, Fausto Rubén Díaz. Se daba cuenta de que arriesgaba la vida. Las teclas nunca habían hecho un ruido tan fuerte. Cualquiera podría escucharlo desde la calle.

Cuando salió poco antes de la puesta del sol, se enteró de la noticia: los mercenarios habían regresado con algunos campesinos capturados a lo largo del día. Las ejecuciones se llevaron a cabo ininterrumpidamente desde las 10 hasta las 2 de la madrugada. El juez no presenció el espectáculo. Los hijos no le preguntaron nada. Rosario no se durmió hasta el amanecer. Leonardo temía que llamaran a la puerta. A la mañana siguiente lo despertó un muchacho avisándole que había una llamada para él en el teléfono del hotel Montserrat. Se vistió y llegó al albergue. Un hombre, que se identificaba como el mayor Hernán Orozco, primer oficial del batallón Joaquín París, le pedía información sobre una especie de juicio popular que habían realizado en el pueblo los guerrilleros del XLVI Frente de las FARC. Leonardo le respondió con monosílabos, sorprendido de que el ma-

yor se interesara por un suceso que había tenido lugar hacía dos meses. Cautelosamente le informó de que Mapiripán había sido invadido por un grupo de hombres armados. “¿Guerrilleros?” “No”. “Están cometiendo algún delito?” Leonardo empezó a dudar de si estaría cayendo en una trampa. Tal vez el que se hallaba al otro lado del hilo telefónico era de las AUC. “No, no... se están comportando de manera decente”.

Una vez colgado el teléfono, Leonardo volvió a llamar al batallón de San José. Sus temores eran infundados. Acababa de hablar realmente con el mayor Orozco, que había sustituido desde hacía unos días al coronel Carlos Eduardo Ávila, que se había marchado de vacaciones. Leonardo le describió lo que estaba sucediendo en Mapiripán, y lo mismo hizo durante los cuatro días siguientes, con llamadas por teléfono cada vez más desesperadas. Orozco no llegaba a creerle. “¿Cómo es posible que hagan esas cosas? ¿Están drogados?” De todas maneras no accedió a la solicitud del juez de mandar rápidamente un destacamento. Orozco dijo que no podía dejar desguarnecida la base de San José. Precisamente aquellos días sus soldados habían salido de misión a Calamar, en el Caquetá. Solamente le prometió que pediría instrucciones al comandante de la XII Brigada, general Jaime Humberto Uscátegui. “Mayor, acudo a su honor militar para que no deje que nos sigan masacrando”, dijo Cortés. Cuando el oficial empezó a enumerar los kilómetros cuadrados que debían controlar sus militares y los pocos medios que tenía a su disposición, Leonardo entendió que su vida y la del resto de habitantes de Mapiripán estaban en manos de los paras.

El día 17 los muertos podían superar ya la veintena. Fue entonces cuando el alcalde Jaime Calderón regresó al pueblo con un bimotor de alquiler, y apareció asimismo el cura. Ambos trataron de minimizar lo que estaba sucediendo. En Mapiripán sólo concebían ilusiones cuando, al concluir la mañana, se juntaban en la plaza los milicianos de las AUC para salir del pueblo. Cada tanto llegaban los ruidos de una batalla lejana. Se comentaba que diversos frentes de guerrilleros habían atacado a los paras por la zona de la Cooperativa. Tal vez andaban por allí quienes habían invadido Mapiripán. Se decía también que los helicópteros de San José estaban ametrallando a los hombres de las FARC. Dado que el Estado se mostraba indiferente ante la matanza de sus ciudadanos, Leonardo había confiado que los muchachos llegaran hasta Mapiripán. Pero empezaba a pensar que tampoco los guerrilleros de las FARC se interesaran por la vida de la pobre gente. También aquel día llamó al mayor Orozco.

Desgraciadamente, los milicianos regresaron con otras víctimas, que entregaron a King Kong. “No es gente de aquí. Serán guerrilleros”, le

comentó el alcalde queriendo tranquilizarlo. La noche transcurrió terriblemente igual a las precedentes, con la sola novedad de un helicóptero que sobrevoló el pueblo durante unos diez minutos. Leonardo quiso creer por un momento que fuera el ejército. Pero cuando notó que era de color blanco, recordó que el jefe de las AUC, Carlos Castaño, solía utilizar un aparato de aquel tipo por todo el territorio nacional sin que nadie le molestara, para coordinar las acciones de sus tropas.

Los gritos de las víctimas mantenían despiertos a los habitantes de Mapiripán. Durante la noche del 17 de julio se escucharon de los dos mataderos cercanos al río Guaviare. King Kong encontraba más cómodo descuartizar sus víctimas cerca del río, para así arrojar los miembros y las vísceras de modo que el tronco se hundiera más fácilmente. A veces el Guaviare devolvía aquellos restos en otro lugar que se adivinaba al día siguiente por el vuelo circular de los buitres. Entre los cadáveres devueltos por el río se encontraba el de Sinaí Blanco, que había sido sacado de su casa la tarde anterior a pesar de los ruegos de las hijas, tras haber permanecido en ella, desesperado, aguardando la muerte. Su asesinato causó una gran impresión porque Sinaí era una de las personas más amables y queridas de todo el pueblo. Mapiripán se hallaba presa del terror. No había actividad alguna. Era un pueblo silencioso. No salía de las casas el sonido de la música de los joropos y el vallenato que antes se confundían en el aire, transmitidas a todo volumen por las radios locales. Solamente en las tabernas donde vivaqueaban pequeños grupos de los paras se oía alguna canción. Entre una cerveza y otra, los milicianos de las AUC no se inhibían de hablar de política con los pocos clientes del pueblo, la mayoría viejos convencidos de que ellos no tenían nada que temer. Los miembros de las AUC aseguraban que estaban protegidos por el gobierno y financiados por los latifundistas de la zona, cansados de pagar impuestos a la guerrilla. Eran las mismas ideas que aparecían en los pasquines distribuidos por el pueblo. “Llegamos para responder a la población convencida de que el Estado no alcanza a cumplir con sus funciones de velar por la seguridad”. Bajo el letrero de la heladería Las Brisas los paras habían escrito con pintura roja: “No nos vamos hasta que acabemos con la guerrilla”, y más abajo: “Fuera guerrilla del Meta... Si te desertas con el fusil se te dan dos millones de pesos y se te respeta tu vida a ti y a tu familia”. Y por todas partes “Muerte a las FARC y al ELN”, y “Viva los paras”. Sólo era conocido uno de los paramilitares, un tal Álvaro, que había frecuentado la escuela de Mapiripán. La mayor parte eran negros de la costa atlántica o pacífica. Los jefes tenían todos el inconfundible acento paisa, de la región de Medellín. Excepto los agresivos hombres de King Kong, los demás parecían tranquilos, como si estuvieran realizando un trabajo como cualquier otro.

La pesadilla duraba ya cinco días. ¿Cuántas personas iban a matar todavía los paramilitares? ¿Cuánto tiempo iba a transcurrir antes de que el Estado se moviera para salvar a los ciudadanos de Mapiripán? Leonardo llamó de nuevo al mayor Orozco. Estaba fuera de sí. El oficial le dijo que esperara y, después de unos minutos, se puso en contacto por radio con un superior. Las palabras que oyó Leonardo claramente, a pesar de los ruidos de las frecuencias, lo dejaron frío. “Dígale a ése que si él no ha hecho nada malo, no tiene nada que temer y que no siga jodiendo”. Comprendió que había expuesto demasiado.

La noche del sábado fue todavía más trágica que las otras. Un grupo de paras secuestró a Ronald Valencia, el negro que trabajaba en el aeropuerto como radio operador, expendedor de billetes y mozo de equipaje. Era padre de seis hijos. Lo acusaron de proporcionar aviones a los comandantes de la guerrilla, le obligaron a ponerse de rodillas y le cortaron la cabeza de un machetazo, precisamente en el momento en que llegaba el correo de Villavicencio. Después, delante de los pocos viajeros horrorizados, se pusieron a jugar a fútbol con su cabeza. Ronald no fue el único al que decapitaron aquella noche. A la orilla del río Guaviare fue encontrada, sobre un palo todavía ensangrentado, la cabeza de un cierto Nelson, que había llegado un mes antes, con su mujer, del Valle, en busca de fortuna. No le bastó jurar que era un reservista del ejército, y pagó la culpa de no llevar consigo los documentos de identidad.

Aquella noche podría haber sido la última para el juez Leonardo Cortés. Al amanecer y salir de casa, se encontró con un vecino que se sorprendió al hallarlo todavía con vida. “Los he oído con mis propias orejas. Decían haber descubierto que usted es el espía y que lo iban a matar por ello”. Leonardo fue presa del pánico. Volvió a casa y encontró llorando a su mujer. “Ha venido el inspector. Dice que debes escapar”. Arriesgando el todo por el todo, Leonardo fue a su oficina, aprovechando que los paramilitares parecían haber desaparecido del pueblo. Llamó de nuevo al mayor Orozco. Le dijo que había sido denunciado a los paras por alguno de su batallón. “Lo único que puedo hacer es enviarle un medio, un camión o un helicóptero, para salvarlo a usted y a su familia”, respondió el oficial. “Si tienen un helicóptero pueden enviar también la tropa para acabar con esta masacre”. “Para eso necesito la orden de mi general que todavía no me ha respondido”.

A pesar de hallarse abrumado por el miedo, no quería abandonar a sus paisanos. En casa encontró al vecino, que había contratado para entonces una avioneta en San José. El piloto exigía 200.000 pesos, una suma que Leonardo no poseía. “Los adelanto yo. Algún día me los devol-

verá”, le dijo el vecino. Leonardo y Rosario necesitaron pocos minutos para llenar unas bolsas y vestir a los niños. Se dirigieron hacia el aeropuerto temiendo tropezarse con los paras. En la pista había un gran gentío. Todos querían escapar. Aterrizaron tres o cuatro aviones. Entre ellos, la avioneta alquilada por Leonardo. Sólo veinte minutos de vuelo separaban el infierno de Mapiripán de San José.¹

Era el 20 de julio, día de la Independencia. El juez estaba demasiado tenso como para notar un gran movimiento de altos oficiales en el aeropuerto de San José. Se acababa de consumir la dramática ruptura entre el presidente Ernesto Samper y el comandante de las Fuerzas Armadas, Harold Bedoya, que había hecho temer incluso un golpe militar. Por primera vez en Colombia, los poderes del Estado celebraban separadamente la fiesta de la Independencia. El poder político se había reunido en la Casa de Nariño en Bogotá. Buena parte de la cúpula militar se había juntado, a su vez, en la escuela de las Special Forces del ejército, en el islote de Barrancón, construida con el dinero de Estados Unidos, a poca distancia de San José y a algunos kilómetros de Mapiripán.

Las idas y venidas de los generales no distrajerón en todo caso al mayor Orozco, que envió un automóvil para recibir a Leonardo y los suyos, y llevarlos seguidamente al hotel Apaporis. Orozco llegó poco después en compañía de un par de amigas. Invitó a todos a desayunar. Mostró al juez los fax enviados al general Uscátegui en los que pedía “montar con los métodos humanos y materiales de la II Brigada móvil una operación rápida e incisiva sobre Mapiripán”. Cuando el mayor le ofreció una escolta, Leonardo comprendió que era necesario alejarse todavía más y lo antes posible de Mapiripán.

Durante los primeros dos días de permanencia en San José, Leonardo se dio cuenta de que periódicos y noticieros de televisión daban como primera noticia la matanza de Mapiripán, adonde habían llegado la Cruz Roja, los periodistas y, finalmente, el 21 de julio, los militares. La delegada de la Cruz Roja, la suiza Anne Sylvie Lander, que se cruzó con los paramilitares mientras abandonaban el lugar, declaró que “nunca habría encontrado un país donde la gente tuviera tanto miedo a hablar, a pesar de que he trabajado hasta hoy en Croacia, Azerbaiyán y Cisjordania”.² Por los mismos noticieros entendió el juez que muchos trataban de minimizar

1. El relato de la masacre de Mapiripán se basa en entrevistas realizadas por el autor al juez Leonardo Cortés Novoa en agosto de 2000, y a los abogados Luis Guillermo Pérez Casas en julio de 2002, y Eduardo Carreño en agosto de 2004.

2. El artículo citado de Ignacio Gómez es del 27 de febrero de 2000.

la matanza. El párroco, don Vinicio Pérez, declaró, por ejemplo, que consideraba exagerado el interés de la prensa por un suceso que había causado “sólo algunas víctimas”. El coronel Luis Fernando Saavedra, jefe de la Policía de San José, defendió que los muertos no pasaban de tres. A su parecer mucha gente había desaparecido “del susto”. El más cínico, en todo caso, fue el general Manuel José Bonnet, según el cual “de primerazo eso de Mapiripán es una rencilla entre narcotraficantes”. Precisamente en aquellos días, Bonnet, destinado a sustituir a Bedoya en la cúpula de las Fuerzas Armadas, era descrito por la prensa como un hombre sensible al tema de los derechos humanos.³

Leonardo tenía prisa por ir a Villavicencio para dar su versión de los hechos al magistrado Fausto Rubén Díaz, su superior. El 22 de julio tomó un avión de línea para Villavicencio, junto con Rosario y sus hijos. Ese mismo día desembarcaba en el aeropuerto de San José, junto con un grupo de jueces, el delegado presidencial para los derechos humanos, Luis Manuel Lazo, enviado con toda urgencia a Mapiripán por el presidente Ernesto Samper. Dos días antes se había firmado en Washington un acuerdo, por el que el gobierno de Bogotá se comprometía a entregar un informe periódico sobre las violaciones de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas. La matanza de Mapiripán ofrecía a Samper la ocasión de demostrar su celo en un tema que parecía interesar de pronto a Estados Unidos. Aquel mismo 22 de julio, el comandante de las Fuerzas Armadas, general Harold Bedoya, denunció, en un acto que tenía todo el aire de rebelión, su postura contraria a cualquier tipo de control civil sobre el ejército y a toda reforma del Código Penal Militar que pudiera sacar de la jurisdicción militar los delitos de lesa humanidad.

Apenas desembarcado en San José, el delegado presidencial para los derechos humanos, Luis Manuel Lazo, comprendió que el ambiente era muy tenso. Los acuerdos hechos en Bogotá preveían que sería acompañado en helicóptero hasta Mapiripán. En el aeropuerto de San José, por el contrario, un general lo ridiculizó por su joven edad y después lo abandonó en tierra junto con los jueces, hasta el punto de verse obligado a alquilar un avión privado. Ya en el aeropuerto de Mapiripán, el grupo permaneció solo, desde las 11 hasta las 16 horas, sin atreverse a salir en ningún momento del edificio municipal. “Tenían mucho miedo”, recuerdan en el pueblo. Unos días más tarde, el fiscal general de la Nación, Alfonso Gómez,

3. La declaración de la delegada de la Cruz Roja y el comentario del general Bonnet, en *Cambio 16*, 28 de julio de 1997.

afirmó que sus hombres no querían sufrir el mismo final de sus colegas asesinados en 1989 en La Rochela.

Durante los meses siguientes fue reconstruida la desconcertante dinámica de la matanza. Los paramilitares comandados por Águila 4 habían llegado de diversas regiones de Colombia. Unos 40 de ellos, originarios de Casanare y del Meta, a las órdenes del esmeraldero Víctor Carranza, habían pasado por el río Manacacías. Varias docenas habían llegado de las regiones de Boyacá y de Cundinamarca. Y el resto, unos 60 hombres de Carlos Castaño, habían descendido de dos aviones, un DC-3 de la Aerolínea Selva, y un Antonov, que habían despegado de los aeropuertos de Necoclí y de Apartadó, en Urabá. Los paras habían llegado el 12 de julio al aeropuerto de San José del Guaviare. Llevaban consigo armas y varios quintales de material propagandístico: manifiestos, pasquines y la revista Colombia libre de las AUC, cuyo cuadernillo había sido distribuido seguidamente tanto en Charras como en el mismo Medellín.

Que hubieran aterrizado los dos aviones aquel día, lo confirmaba el registro de aeronáutica civil, aunque ni los militares del batallón Joaquín París ni la Policía con sede en el aeropuerto parecieron darse cuenta de ello. En San José, en plena zona cocalera, no se podía, por norma, transitar sin ser registrado y revisado cuidadosamente. Y, sin embargo, aquel fatídico 12 de julio de 1997, los paras pasaron sin problemas y sin dejar huella alguna. Ningún oficial asignado al aeropuerto logró explicar nunca aquel misterio. “En la pista había personal militar y yo paré frente a la Policía Antinarcóticos, pero nadie dijo nada. Es más, los del Ejército posaron y se tomaron fotos al lado del avión”, dijo a un juez el piloto del DC-3, antes de ser misteriosamente asesinado. Tampoco tuvieron problema alguno los paras en su partida a Mapiripán, y pasaron tranquilamente delante de los puestos militares de control hasta llegar a su meta.

La verdad sobre Mapiripán estaba subiendo a la superficie gracias al valor de Leonardo Cortés. El juez describió la dinámica de la masacre al procurador general en Bogotá y, en Villavicencio, al presidente del Tribunal, Fausto Rubén Díaz. Leonardo comprendía que los riesgos corridos durante los días de la matanza, aunque no habían servido para evitarla, podían tal vez lograr que no quedara sin castigo. Los militares comenzaron a defenderse. El general Uscátegui sostuvo que lo habían tenido desinformado de todo hasta el 20 de julio. Echó la culpa al superior de Leonardo. “Si el Tribunal de Justicia recibió un fax del juez, ¿por qué no informó?” El magistrado respondió cándidamente que ni siquiera había pensado hacerlo, habida cuenta de las estrechas relaciones entre oficiales y paramilitares.

Al comienzo, pareció dominar dentro del ejército el principio de silencio corporativo. Los dos oficiales más implicados en el asunto trataron de no contradecirse mutuamente. El mayor Orozco intentó, bastante burdamente, justificar al general Uscátegui. “Instrucciones sí se dieron”, afirmó sin indicar cuáles. Uscátegui, por su parte, declaró con firmeza que el ejército se veía forzado a marcar prioridades cada día. “No podía quitar la tropa de Calamar para mandarla a Mapiripán”.

Mientras tanto, Leonardo recibió varias llamadas telefónicas amenazadoras en Villavicencio. En dos ocasiones una mujer lo alcanzó en el momento en que entraba en casa de los parientes donde se había alojado: “No se preocupe, que de ésta no se salva”. El juez cambió de casa, trató de salir lo menos posible y no ir solo a ninguna parte. Durante las semanas en que residió en Villavicencio viajó dos veces a Mapiripán, convertido ahora en un pueblo fantasma. Solamente se había quedado un tercio de los vecinos. Los más reacios a dejar el lugar eran los viejos, acostumbrados a todo tipo de barbaries. Leonardo se alojó en el hotel Montserrat. No se veía ni sombra de los militares que el gobierno había prometido enviar para proteger el pueblo, aunque tampoco paras, concentrados para entonces por la zona de Puerto Gaitán, en el Meta nororiental, para responder a un ataque en toda regla de las fuerzas de la guerrilla. Después de la matanza de Mapiripán, el duro de las FARC, Jorge Suárez Briceño, llamado Mono Jojoy, había dicho: “No podemos quedarnos cazando moscas mientras el enemigo gira tranquilamente con las motosierras y los machetes”. En Mapiripán, Leonardo debía recoger la documentación necesaria para justificar su ausencia del pueblo, ya que no faltaban lenguas que decían en la administración del Ministerio de Justicia que él podía continuar tranquilamente ejerciendo sus funciones de juez. La angustia no le abandonaba en ningún momento mientras se hallaba en Mapiripán. Se vio asimismo con el alcalde, quien le pidió que “no lo comprometiera” en sus declaraciones, llegando a ofrecerle dinero y hasta un queso.

Los superiores de Villavicencio le propusieron un cargo en Carurú, en el Vaupés, una región amazónica dominada por las FARC, que Leonardo rehusó pues no quería ganarse la reputación de “juez de la guerrilla”. Después de un par de meses fue asignado a El Cairo, cerca de Cartago, en el norte del Valle del Cauca, sometida al cartel del norte del Valle, marcado con otras matanzas terribles, como la de Trujillo. Le resultaba difícil pasar inadvertido. Sin asentarse siquiera en El Cairo, empezó a recibir amenazas. Un día encontró llorando a Mabel, su secretaria. “Dicen todos en el pueblo que usted será asesinado pronto”. Al día siguiente Leonardo fue interceptado por varios hombres que acababan de bajar de un Toyota con

las ventanillas opacas. Afortunadamente no eran matones sino funcionarios judiciales de Cali, que le invitaron a seguirles. “No puede quedarse un día más”, le dijeron mostrándole una orden de comparecencia. Leonardo no tenía dinero para pagarse el hotel, ya que daba a su mujer casi toda la paga. En Cali se vio obligado a hospedarse durante ocho días en las casas de los agentes judiciales. La situación comenzaba a ser insoportable, entre otras cosas, porque todos tenían la costumbre de llamarle “comandante”, incluso en la fiscalía, como se hacía con los jefes guerrilleros.

Para sustraerlo a la persecución se movilizaron varias asociaciones humanitarias, entre ellas Amnistía Internacional. De esa forma pudo llegar hasta Bogotá, reunirse con la familia y, después de dos días, viajar hacia Suiza, donde todavía reside como exiliado político. El exilio es la única alternativa al cementerio. Con el tiempo, después de recibir repetidamente amenazas de muerte, también su padre y sus seis hermanos se vieron obligados a abandonar Colombia.

El exilio fue también el destino del periodista Ignacio Gómez, responsable de la sección de investigación de *El Espectador*. Gómez se tomó la tarea de leer las 4500 páginas de los documentos oficiales sobre la matanza de Mapiripán, encontradas gracias a la colaboración del senador norteamericano Patrick Leahy promotor, junto con Edward Kennedy, de la norma que prohíbe al ejército de Estados Unidos instruir a militares involucrados en la violación de derechos humanos. Gómez descubrió que el 21 de junio de 1997, el comandante de la II Brigada móvil del ejército colombiano, coronel Lino Sánchez, había revelado su intención de introducir a los paramilitares en la región. Según un informe oficial, Sánchez se dirigió a la sede de la Policía de San José para solicitar su apoyo a los paras, contando con ellos para “darle una lección a la guerrilla”. Un desertor militar, detenido en los meses siguientes a la masacre, acusó a Sánchez de haber coordinado la llegada de los paras y todos sus movimientos. En noviembre de 2001, el coronel Sánchez fue arrestado y destituido por dar una imagen del ejército “como una institución proclive al entablamiento de nexos con grupos paramilitares y a la ejecución de actos terroristas”.

Ignacio Gómez demostró que, en la época de la matanza, el destacamento mandado por Sánchez estaba haciendo un curso en la base de Barrancón, dirigido por decenas de instructores del VII destacamento de las Special Forces, con sede en Fort Bragg, en Carolina del Norte. Desde mayo hasta octubre de 1997, los famosos boinas verdes, de habla española, realizaron varios cursos de “planeamiento de la misión” y toma “de la decisión militar y entrenamientos de combate fluvial”. ¿Se encontraban presentes militares norteamericanos en la zona durante los días de la

masacre? Según el consejero presidencial Luis María Lazo y los magistrados llegados a Mapiripán el 22 de julio, los oficiales de Estados Unidos estaban celebrando el final de su curso.

Gómez escribió en *El Espectador* un artículo titulado “Los peligros de la ayuda militar”, en un momento en que el gobierno Clinton estaba valorando si dar y en qué condiciones, dentro del Plan Colombia, 1.600 millones de dólares al gobierno colombiano, de los que el 80% se destinaba al ejército.⁴ Alguien decidió hacérselo pagar. Después de recibir varias llamadas telefónicas, el periodista fue interceptado el 30 de mayo de 2000 en una calle de Bogotá, por dos hombres que intentaron meterlo dentro de un automóvil. Logró desasirse y llamar a la Policía con su móvil. En la comisaría los oficiales le dijeron que no podían garantizar su seguridad.⁵ A los dos días escapó a Estados Unidos, puesto que no quería terminar con un tiro en la cabeza, o en un vertedero, como ha sucedido a decenas de colegas suyos desde 1998 hasta hoy en día.

Le fue mejor a María Cristina Caballero, enviada por la revista *Cambio 16*, que llegó a Mapiripán tras la partida de los paras, para luego escribir un excelente reportaje titulado “Mapiripán, una puerta al terror”. Posteriormente fue obligada a retractarse. Hubo de efectuar una entrevista a Carlos Castaño, que la revista publicó, con grandes titulares y en varias entregas, cuatro meses más tarde. El capo de las AUC afirmó que la gente amenazada de Mapiripán era “de lo más peligroso y despreciable”, y negó que sus hombres los hubieran despedazado. “Cuando hay que matar a alguien se le mete un tiro”.⁶

El periódico *El Tiempo*, bien informado siempre de las intenciones de los paramilitares, anunció en septiembre de 1997 que: “Va a haber muchos Mapiripanes”. Y efectivamente fue así, al ritmo de 300 a 400 matanzas al año, aunque ninguna tuvo tanto eco como la de Mapiripán. Tampoco dieron demasiadas preocupaciones al ejército. Las denuncias del juez Leonardo Cortés Novoa, y los artículos de María Cristina Caballero e Ignacio Gómez impidieron, al menos, que el suceso cayera en el olvido.

En los meses que siguieron a la masacre, los superiores obligaron al mayor Orozco a no hablar con los periodistas. El general Uscátegui lo persuadió de que destruyera, o al menos modificara los informes que le habían remitido por fax durante la incursión de los paras. Transcurrieron

4. *El Espectador*, 6 de junio de 2000.

5. *Cambio 16*, por entregas desde el 5 de diciembre de 1997.

6. *El Espectador*, 22 de julio de 1999.

dos años antes de que la Fiscalía interrogara a Orozco, ascendido a coronel y confinado en la pequeña ciudad de Leticia, en el Amazonas, colindante con Brasil y Perú. Las manipulaciones de los fax pidiendo ayuda eran demasiado burdas para ser negadas. Cuando Orozco decidió contar la verdad sobre la masacre, Uscátegui fue arrestado. Desde entonces Orozco comenzó a recibir amenazas. En una entrevista a *El Espectador* contó que un ministro de Defensa le había invitado a ponerse a salvo. “Me dijo, Coronel acuérdesse de que estamos en Colombia, y me preguntó si tenía un carro blindado”.⁷ Afortunadamente no se le puso delante ningún sicario, sino solamente la justicia militar que, después de haber sustraído el caso a la civil, lo condenó en marzo de 2001 a 38 meses de cárcel por “haberse limitado sólo a enviar la advertencia a Uscátegui y no insistir en el envío de tropas”, castigando al general solamente con dos meses más por el delito “de prevaricación por omisión, en la masacre”. Cuarenta meses de cárcel por los 48 muertos de Mapiripán. Human Rights Watch afirmó que la absurda sentencia contenía un claro mensaje para los oficiales jóvenes: “Tengan cerrada la boca, o lo pagarán”. Aunque parezca increíble, a los periódicos colombianos les pareció una sentencia ejemplar.

El Tiempo escribió: “El que haya sido la jurisdicción militar, tan satanizada por las organizaciones de derechos humanos, la que impuso tan drástica sanción a un general de la República, despeja en algo la sospecha que ha hecho carrera en círculos de prensa extranjera, ONG y el Departamento de Estado de Estados Unidos, de que por una mal entendida solidaridad de cuerpo, los altos mandos encubren a sus colegas, sobre todo si son de alto rango. A fin de cuentas, en el degradado conflicto colombiano, los militares no son los malos de la película, como los pinta la comunidad internacional”.⁸

En noviembre de 2001, la Corte Constitucional anuló la sentencia contra Orozco y Uscátegui, sosteniendo que casos de aquella índole deberían haber sido juzgados por un tribunal civil. La Organización de los Estados Americanos tuvo que intervenir para salvar la vida de Orozco. Sus convicciones se habían vuelto incómodas. Éste dijo a un juez: “En la actualidad los militares en el Ejército consideran el paramilitarismo como la Sexta División, nombre simbólico que se le ha dado a esa organización que los recibe y los termina de preparar para confrontar a la subversión... es absolutamente cierto que existe una cultura e ideología al interior del Ejér-

7. *El Tiempo*, 15 de febrero de 2001.

8. *El Espectador*, 22 de mayo de 2001.

cito para facilitar el cumplimiento de los objetivos militares de las autodefensas". Antes le fue asignada una escolta de confianza y después le fue permitido exiliarse con su familia en Miami. A Uscátegui le fue peor: el 23 de febrero de 2003 fue arrestado de nuevo como presunto autor, por omisión, de los delitos de homicidio agravado, secuestro agravado y falsedad en documento público. Detenido en una vivienda en la Escuela de Caballería del Ejército, al norte de Bogotá, en la víspera del juicio, amenazó con revelar varios secretos sobre "una cuestión que nosotros toda la vida hemos negado, que es el vínculo de los militares con los paramilitares". Según el general, "los panfletos que entregaron las autodefensas en la masacre de Mapiripán los hicieron en ese computador en el batallón París".

El 20 de junio de 2003, un tribunal de Bogotá halló culpable de la masacre de Mapiripán a Carlos Castaño, que se reconoció reo sin pudor alguno, y lo condenó a cuarenta años de prisión. La misma pena le fue aplicada al coronel Lino Sánchez mientras condenó a 32 y 22 años a dos sargentos del batallón Joaquín París, además de condenar a varios sicarios paramilitares. Dichas condenas fueron confirmadas en febrero de 2005 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, donde salieron a la luz otros cómplices de la masacre. Uscátegui no "prendió el ventilador", como había amenazado, diciendo que prefería que sus hijos "tengan un padre preso y no un padre en una tumba". Pero otros testigos hicieron afirmaciones contundentes. El empresario de Medellín, Pedro Juan Moreno, dijo que todos los altos mandos de la policía y del ejército de Antioquia sabían lo que iba a pasar en Mapiripán.⁹

Una verdad conocida también por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que en octubre de 2003 admitió formalmente la demanda por la masacre de Mapiripán, en la que se acusa al Estado colombiano de omisión y colaboración con los grupos paramilitares que cometieron el crimen.

Al cabo de siete años de aquel atroz baño de sangre que vio y tuvo coraje de denunciar, el juez Leonardo Cortés cobró en cierto modo su premio, aunque nada ni nadie esté en condiciones de ahorrarle a él y su familia un penoso exilio al otro lado del mundo.

⁹. *El Tiempo*, 20 de junio de 2003; *Cambio*, 29 de marzo de 2004; *Semana*, 6 de febrero de 2005 y *El Tiempo*, 26 de enero y 7 de febrero de 2005.